

6-ESTADO-2012

CÁMARA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO: San Salvador, a las nueve horas y siete minutos del día diecinueve de junio del año dos mil doce.

Agréganse los documentos presentados con la demanda de fs. 1 a 3 fte.

Tiénese por parte procesal al licenciado JORGE ALBERTO FUENTES DERAS, como apoderado de la demandante señora MARIA ISABEL SALVADOR DE SURIA, a quien hágasele las notificaciones en el lugar o medio técnico que al efecto señala en la referida demanda.

EXAMEN DE PROPONIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN CONTENIDA EN LA DEMANDA.

Esta Cámara ha expresado en anteriores resoluciones, como una atribución judicial, que es facultad y deber del juzgador realizar un examen de proponibilidad de la pretensión en un proceso determinado, pues cuando la pretensión adolece de un defecto en sus requisitos, se configura un vicio absoluto en la facultad de juzgar, que desemboca en la improponibilidad, es decir, que habrá improponibilidad de la pretensión cuando el juzgador -luego de realizar el juicio de proponibilidad- determine que se encuentra absolutamente imposibilitado para juzgarla.

Y es que esta institución faculta al Juez para evitar litigios judiciales erróneos, que, más tarde, retardarán y entorpecerán la pronta expedición de justicia.

MOTIVACIÓN.

Sobre la pretensión incoada por el mencionado apoderado, de conformidad a lo establecido en los arts. 14, 24, 40, 90, 91, 160, 276 y 277 CPCM., los suscritos Magistrados, como directores del proceso, formulan las siguientes estimaciones jurídicas:

I) Requisito fundamental del proceso, es la válida conformación de la relación jurídica procesal, en la cual, para que exista y sea perfecta, se requiere que las personas vinculadas entre sí, sean las legitimadas material y procesalmente, lo que es un requisito esencial de la pretensión incoada en la demanda.

De tal manera se afirma que el juez ha de controlar de oficio la concurrencia de la legitimación, siendo éste un verdadero presupuesto procesal, ello, en aras de asegurar una tutela judicial efectiva, lo que reside en la idea de evitar que se tramite un juicio que desde el inicio, presenta la certeza de que las partes no son las adecuadas. Esto es, que quien demanda o contra

quien se demanda, no revisten la condición de personas habilitadas por la ley para discutir sobre el objeto a que el juicio se refiere; es decir, que el proceso necesita que actúen quienes deban hacerlo, por ser las personas físicas o jurídicas idóneas para discutir sobre el objeto concreto de la *litis*.

II) En el caso en estudio, el apoderado de la parte demandante, licenciado JORGE ALBERTO FUENTES DERAS, en el acápite de las pretensiones, manifiesta: *“Que con expresas instrucciones de su poderdante viene a demandar en Proceso Declarativo Común Reivindicatorio de Dominio al actual poseedor del relacionado inmueble, al Ministerio de Educación, representado por el señor Salvador Sánchez Cerén, como Ministro de Educación, a efecto de que SE CONDENE AL MINISTERIO DE EDUCACION A RESTITUIR a la señora María Isabel Salvador de Suria, el inmueble antes descrito, de naturaleza rústica y construcciones que contiene, situado en el Cantón La Virgen, jurisdicción de San Cristóbal, Departamento de Cuscatlán, y que se condene al demandado al pago de las costas procesales que acarrea el proceso.*

JUSTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ESTA CÁMARA.

En el caso sub júdice, estamos frente a uno de los supuestos señalados como aquellos que imposibilitan un pronunciamiento jurídico de la facultad de juzgar; pues, en la parte petitoria de la demanda, el apoderado de la parte demandante, licenciado JORGE ALBERTO FUENTES DERAS, pide que se CONDENE AL MINISTERIO DE EDUCACION A RESTITUIR a la señora María Isabel Salvador de Suria, el inmueble objeto del debate.

Bajo esa perspectiva, la pretensión carece de uno de los requisitos esenciales de procesabilidad, pues no va dirigida contra el Estado de El Salvador, y que se condene a éste, sino, contra el Ministerio de Educación, el cual no puede ser demandado, ya que este forma parte del Estado.

Que lo anterior impide que esta Cámara entre a conocer el fondo de la cuestión sometida a juzgamiento, por no estar debidamente configurada la relación jurídica procesal, más específicamente, por no determinarse debidamente el sujeto pasivo de la relación jurídica procesal, en virtud que, el Ministerio de Educación, forma parte del Órgano Ejecutivo, según lo consagra el art. 150 de la Constitución, que dice: *“El Presidente y el Vicepresidente de la*

República, los Ministros y Viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes, integran el Órgano Ejecutivo”.

Consecuentemente, si en un proceso se pide emplazar y condenar al Ministerio de Educación, estamos frente a una demanda discordante, porque no concuerda la persona demandada, con aquella que constitucionalmente ostenta su representación, por lo que en el presente caso la pretensión incoada en la demanda se debe de rechazar por ser improponible, pues se advierte un defecto, ya que no se ha demandado adecuadamente.

CONCLUSIÓN.

En concordancia con lo expresado, esta Cámara concluye que no es jurídicamente válido pretender que se condene al MINISTERIO DE EDUCACION, a restituir el inmueble objeto del debate, por la razón de que no reviste por sí la condición de persona habilitada por la ley para discutir sobre el objeto a que el proceso se refiere, porque no es la persona que representa los intereses del Estado de El Salvador.

De lo expresado se advierte, que la pretensión contenida en la demanda presentada, tiene un defecto, por lo que se debe de rechazar por ser improponible, ya que evidencia falta de presupuestos materiales o esenciales de procesabilidad.

Y no se vaya a pensar que se está prejuzgando, o que *a priori*, se le está negando a la parte demandante la oportunidad de satisfacerle su pretensión, o que se está violentando el derecho a la protección jurisdiccional, enmarcado en el art. 1 CPCM.; pues de qué serviría admitir y darle trámite a una demanda, que al examinarla desde su inicio está fracasada, y los suscritos son del criterio que el acceso a la justicia tiene que ser eficaz, y que las partes no incurran en gastos innecesarios, evitando así un despilfarro tan inútil como ocioso de la actividad jurisdiccional.

Sobre la base de los fundamentos expuestos, disposiciones legales citadas y de conformidad con lo dispuesto en los arts.1 inc. 1º, 11, 15, 18, 172 inc. 1º, 182 atribución 5ª Cn., 1, 3, 212, 215, 216 y 277 inc. 1º CPCM, esta Cámara **RESUELVE: DECLÁRASE IMPROPONIBLE LA PRETENSIÓN** contenida en la demanda de fs. 1 a 3 fte., interpuesta por el licenciado JORGE ALBERTO FUENTES DERAS, en su concepto de apoderado de la demandante señora MARIA ISABEL SALVADOR DE SURIA, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. **Hágase saber.-**

Pronunciado por los Señores Magistrados que lo suscriben.